

Director
Francisco Muñoz Jaramillo

Comité Editorial
Santiago Ortiz
Franklin Ramírez

Consejo Editorial
Jaime Arciniegas, Augusto Barrera,
Jaime Breilh, Marena Briones, Carlos Castro,
Galo Chiriboga, Eduardo Delgado,
Julio Echeverría, Myriam Garcés, Luis Gómez,
Ramiro González, Virgilio Hernández,
Guillermo Landázuri, Luis Maldonado Lince,
René Maugé, Paco Moncayo, René Morales,
Melania Mora, Marco Navas, Gonzalo Ortiz,
Nina Pacari, Andrés Páez, Alexis Ponce,
Rafael Quintero, Eduardo Valencia, Andrés Vallejo,
Raúl Vallejo, Gaitán Villavicencio

Edición
María Arboleda
Raúl Borja

Diseño, portada y gestión de imágenes
Verónica Ávila / Activa Diseño Editorial

Auspicio
ILDIS - FES
Avenida República 500, Edificio Pucará
Teléfono (593) 2 2 562 103
Quito - Ecuador
www.ildis.org.ec

Impresión
Gráficas Araujo
08 44 90 582

Los editores no comparten, necesariamente, las opiniones vertidas por los autores, ni estas comprometen a las instituciones a las que prestan sus servicios. Se autoriza a citar o reproducir el contenido de esta publicación, siempre y cuando se mencione la fuente y se remita un ejemplar a la revista.

laTendencia
—revista de análisis político—

© de esta edición: cada autor
ISSN: 13902571
Marzo/Abril de 2009

laTendencia

—revista de análisis político—

Franklin Ramírez Gallegos
Virgilio Hernández
Fernando Buendía
Julio Oleas Montalvo
Juan Cuvi
Diego Mancheno
Floresmilo Simbaña
Edgar Isch I.
Milton Luna Tamayo
Bayardo Tobar
Ana María Larrea
Alfredo Ruiz Guzmán
Gaitán Villavicencio
Kintto Lucas
Julio César Trujillo
Agustín Grijalva
Diego Borja
Carlos Castro
Víctor Hugo Jijón
José Luis Coraggio
Daniel Badillo
Francisco Hidalgo
Gerardo Venegas
Enrique Arias
climático
Claudia Detsch
Guillaume Long
Jorge Guamán
Dalton Bacigalupo
Silvia Salgado
Alex Remache

10 feb/mar 2010

Coyuntura

5 **Editorial**
Nuevo momento:
fortalecer el acuerdo
por el cambio
Francisco Muñoz Jaramillo

10 La política partida en
tres: ¿Se deshacen las
costuras
entre las fuerzas del
cambio?
Franklin Ramírez Gallegos

17 Las fuerzas políticas
en la Asamblea Nacional
Virgilio Hernández y
Fernando Buendía

26 Comercio exterior y
desarrollo
Julio Oleas Montalvo

32 De la soberbia al
oportunismo: Estrategias
de la derecha en la
revolución ciudadana
Juan Cuvi

36 Política económica:
Balance crítico
Diego Mancheno



42 Las relaciones entre el
movimiento indígena y
el gobierno
Floresmilo Simbaña

48 El gobierno de Correa
y su conflicto con el
magisterio
Edgar Isch I.

54 Educación: más Estado
junto a más Sociedad
-La anacrónica relación
Ministerio - UNE-
Milton Luna Tamayo

58 Cinco tesis equivocadas
sobre la necesaria
reforma de la
Universidad
Bayardo Tobar

61 Autonomía universitaria
y sociedad de mercado
Ana María Larrea

67 Universidad-ejecutivo:
una relación de
coordinación
Alfredo Ruíz Guzmán

73 La nueva arquitectura
financiera instrumento
para la integración y el
Desarrollo de la Región
frente a la Crisis
Pedro Páez

78 Crisis energética,
vida cotidiana y
governabilidad
democrática -
Emergencia eléctrica y
gestión del Gobierno del
Nacional Populismo-
Gaitán Villavicencio

84 ¿Comunicación
democrática o dictadura
mediática?
Kintto Lucas



Política pública y legislativa

88 El fundamento
constitucional de la
nueva economía
Julio César Trujillo
y Agustín Grijalva

94 La instrumentación de
la nueva economía en el
contexto del régimen de
desarrollo
Diego Borja

98 Defender el programa
constitucional
Carlos Castro

103 Economía alternativa,
plurinacionalidad e
interculturalidad
Víctor Hugo Jijón

108 La economía popular
solidaria en el Ecuador
José Luis Coraggio

115 El rol de las empresas
públicas en la nueva
economía del Ecuador
Daniel Badillo

119 Reforma y nueva política
sobre la tierra
Francisco Hidalgo

123 Régimen de desarrollo
Gerardo Venegas



Debate

143 Régimen de
desarrollo y nueva
economía propuesta
en la Constitución
Dalton Bacigalupo

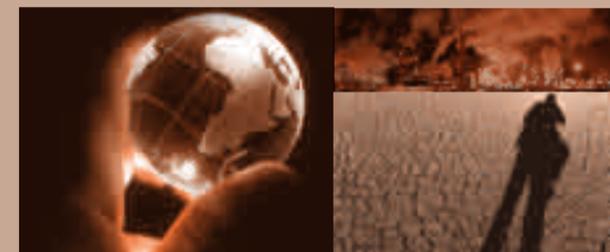
151 Madurar un
nuevo régimen de
desarrollo y una
nueva economía
para profundizar el
cambio
Silvia Salgado y
Alex Remache

Internacional

128 La actual crisis
económica mundial
Enrique Arias

132 Latinoamérica en
las negociaciones
internacionales
sobre cambio
climático
Claudia Detsch

138 Ecuador entre
UNASUR y ALBA
Guillaume Long



143 La nueva
Constitución y sus
retos -Mushuk
kamukpak llankay-
Jorge Guamán

la política

partida en tres

¿Se deshacen las costuras entre las fuerzas del cambio?

Las elecciones generales de abril del 2009 cierran un primer momento de la Revolución Ciudadana. El recambio de élites, la transformación de las bases constitucionales del país, el giro de la agenda de políticas públicas –hacia lo que ha sido calificado como post-neoliberalismo– y la re-elección presidencial, se sucedieron a un ritmo a todas luces vertiginoso: veinte y ocho meses de gestión gubernativa. Solo a modo de contrapunto, en el proceso de cambio político conducido por el Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, el cierre de similar ciclo político (elección de fuerza anti-sistémica, cambio constitucional, giro en agenda pública, y re-elección presidencial) tomó a la fuerza gobernante todo el primer período de gobierno (2005-2009) del Presidente Evo Morales.

Sin embargo, a diferencia del proceso boliviano, donde luego de las elecciones generales de diciembre 2009 Evo Morales y el MAS quedaron mejor emplazados en términos de fuerza y hegemonía que cuando empezaron su gobierno –derrotaron largamente a la derecha autonomista de la denominada “media luna”–, en el Ecuador la plataforma política de la Revolución Ciudadana no parece haberse expandido mucho más allá de los circuitos constituidos por la propia fuerza gobernante.

En efecto, a pesar de la re-elección presidencial en primera vuelta, del crecimiento de AP a nivel nacional y local¹, y de la extrema debilidad de los partidos tradicionales², los cimientos políticos de la Revolución Ciudadana lucen menos sólidos de lo que se piensa:

- El principal partido opositor, el PSP, obtuvo 10 puntos más que en 2006 (pasó del 17,40 al 28,24). En su torno se articuló un voto anticorreísta duro que antes se expresaba también en la figura de Álvaro Noboa (que obtuvo, de todos modos, 11,41% de los votos). Entre los dos candidatos suman casi 40% de apoyo electoral.
- Correa no pudo alcanzar el 63% con el que la ciudadanía aprobó la Carta Magna en septiembre 2008. El 52% de respaldo a la re-elección presidencial evidencia que la agenda de cambio no es visualizada como bandera de un solo movimiento político.
- AP no alcanza por sí solo mayoría parlamentaria; hay una nítida deflación con relación a los resultados obtenidos en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente.
- Los candidatos de AP pierden en Guayaquil, la mayor circunscripción electoral del país, sus postulaciones para la alcaldía y la prefectura. Jaime Nebot es re-electo por tercera vez como alcalde. Su movimiento, Madera de Guerrero-Partido Social Cristiano, recupera presencia parlamentaria a nivel de la provincia del Guayas³.

- Sectores de la izquierda se alejan del gobierno y en las elecciones presidenciales obtienen algo más de 5 por ciento del total de sufragios si se agregan las votaciones obtenidas por la RED-Polo Democrático y los del MITS.

El relativo éxito de la re-elección presidencial supuso un llamado de alerta sobre la necesidad de priorizar la organización política de la fuerza gobernante y de desatar procesos de movilización popular en torno del proceso de cambio. No obstante, aparte del estéril debate sobre los comités de defensa, la efectividad de tal estrategia aún no es visible: los adeptos al proceso aplauden a la Revolución Ciudadana desde lejos y a través de la pantalla chica. Detrás de las conquistas electorales de AP hay, en efecto, menos articulación hegemónica y dinamismo organizativo que buena imagen presidencial, cierta coherencia gubernativa, y pertinencia de la política social. Algunos de sus más altos cuadros lo saben. Preparan la primera convención del movimiento, recién, para el primer semestre del 2010.

Desaceleración política

Los resultados electorales reflejarían, en buena parte, las fisuras y tensiones entre Correa y los sectores situados, en formas convencionales o innovadoras, a la izquierda del gobierno. Ello des-configuró, en el seno del nuevo poder legislativo, las alianzas políticas tejidas durante la Asamblea Constituyente: AP, PK, MPD y otros sectores operaron en Montecristi como un ‘mega-bloque’. A la vez, se ha incrementado la incertidumbre estratégica entre las principales fuerzas políticas: la elección de Fernando Cordero (AP) como Presidente de la Asamblea se estructuró con una frágil coalición que aún no ha podido ser plenamente consolidada y, menos aún, ampliada. Los socios del oficialismo apenas consiguen ocultar, además, sus pequeños y grandes apetitos detrás de una enorme vaciedad ideológica. La debilidad articularia, que refleja e incuba recurrentes episodios de volatilidad programática, abrió el contexto de oportunidad para la activación de un nuevo ciclo de conflictividad social.

¹ A nivel local también se observa el afianzamiento de AP: luego de que en 2006 no presentara candidatos a las autoridades seccionales, en 2009 alcanza –con ciertas alianzas– el 40% de las prefecturas, entre el 30 y el 35% de los municipios y el 45% de las juntas parroquiales. Destaca, sobre todo, el triunfo en Quito donde por primera vez la izquierda llega al gobierno municipal.

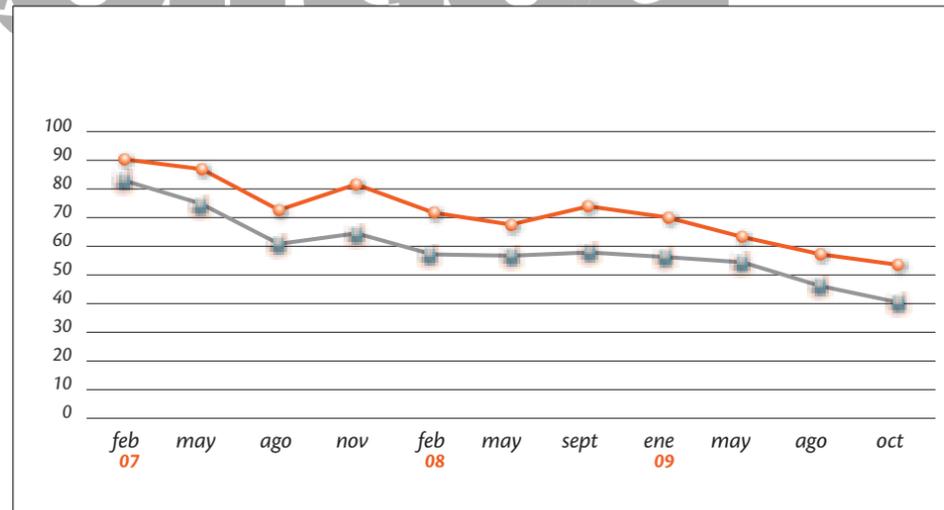
² El deterioro de las fuerzas políticas tradicionales se expresa también en el nivel local. A nivel de las prefecturas, por ejemplo, el PSC, el PRIAN, el PRE y la UDC no tienen por sí solos ni una sola autoridad electa. La ID ganó en una provincia.

³ Luego de obtener 9,82% de la votación en las elecciones para la Asamblea Constituyente (2007), el PSC alcanza en 2009 el 35,4% de apoyo electoral provincial. AP decrece a su vez casi 25 puntos: del 59,58% al 34,28%. En Guayas existe, entonces, un virtual empate entre ambas fuerzas.

Evolución de la credibilidad y de la gestión del Presidente Correa

Fuente: Perfiles de Opinión.

— Gestión
— Credibilidad



Así, además de los partidos tradicionales, la banca, los gremios empresariales, los grandes medios y la cúpula de la iglesia católica, entre otros sectores, que se opusieron –por *derecha* y desde el arranque mismo del gobierno– al proyecto de la Revolución Ciudadana, desde el inicio del 2009 se observa también la emergencia de una serie de protestas sociales vinculadas con el movimiento indígena, diversos sindicatos públicos, el gremio de maestros, sectores no organizados de la clase media y pequeños partidos de izquierda que se posicionan de modo crítico frente a un gobierno al que, aún de modos difusos, apoyaron durante los primeros años de su gestión. Algunos de estos sectores ya habían convergido antes, durante la campaña del referéndum constituyente de septiembre 2008, cuando optaron por un *apoyo crítico* a la aprobación de la nueva Carta Magna.

Dicha conflictividad ha estado estrechamente ligada a la discusión de diversas leyes que –por mandato constitucional– debían aprobarse luego de un año de ratificada la Carta Magna. Se trata de leyes prioritarias de cara al proceso de cambio político que vive el país: ley de soberanía alimentaria, ley de aguas, ley de comunicación, ley de servicio público, ley de educación superior, entre otras. Las dificultades de articulación al interior del bloque oficialista y las diversas líneas de oposición a los proyectos de

ley presentados por AP han retrasado su procesamiento. Además de los diferendos programáticos, la escasa apertura al diálogo del entorno presidencial y el no *reconocimiento político* de la legitimidad de sus adversarios, han pesado en la configuración de tal escenario.

En medio del complejo panorama legislativo el Gobierno debió enfrentar, por un lado, el escándalo de los contratos públicos obtenidos por el hermano mayor del Presidente y, por otro lado, la ofensiva de Colombia, de la derecha parlamentaria, de la prensa nacional e internacional, sobre presuntas implicaciones de funcionarios gubernamentales con las FARC. Así, luego de dos años de gozar de una inmensa popularidad, los índices de confianza en el Presidente tienden a observar un decrecimiento cuya intensidad varía según cada encuestadora.

Los efectos de la crisis económica global en el desempleo y la recurrencia de los problemas de inseguridad y violencia pública también habrían pesado en la caída de la credibilidad del presidente. No obstante, y aunque también desciende, la valoración de la gestión de su gobierno sigue siendo considerable. Ello obliga a tomar con cautela la pertinencia de los análisis que explican –a través del uso de la noción de populismo– los procesos políticos en los países andinos como puro efecto del prestigio, las

capacidades comunicativas y el carisma de líderes con grandes dotes discursivas. Al contrario, desde su primer año de gestión, la Revolución Ciudadana ha sido mejor evaluada por su acción gubernativa que por la confianza ciudadana en las palabras de su líder⁴:

En cualquier caso, tanto los resultados de las elecciones generales de abril como las encuestas de opinión del 2009 revelan que el tercer año de la Revolución Ciudadana ha implicado para Rafael Correa y el movimiento gobernante una desaceleración en el crecimiento de sus robustas cotas de apoyo político. Dicha tendencia es más nítida en Guayaquil, ciudad de nacimiento del mandatario y donde, paradójicamente, AP desplegó mayores esfuerzos para desplazar a Jaime Nebot y a las élites locales de la plena hegemonía política de la ciudad.

Si bien hay señales de que dicho desplazamiento ha ocurrido aunque sea de modo parcial –Nebot ya no controla totalmente el Concejo Municipal y diversos sectores populares han comenzado a movilizarse en su contra–, también es cierto que gran parte de lo que AP avanzó en el marco del proceso constituyente ha sido recuperado por las fuerzas afines al Alcalde. En ello habría incidido la reactivación de una retórica que apela a la identidad guayaquileña como forma de confrontar la presencia de la acción estatal y de (re) legitimar la tesis de la autonomía política de la ciudad.

El regionalismo discursivo ha sido permanentemente utilizado por las élites locales como recurso político a la hora de encarar batallas contra lo que ellos observan como los excesos del centralismo gubernamental *quiteño*. Aunque gran parte del gabinete ministerial y de los más altos cuadros políticos del gobierno provienen de la ciudad de Guayaquil, y aunque la nueva Constitución reconozca la figura de los “distritos metropolitanos autónomos” (Quito y Guayaquil), el contundente retorno del Estado en la planificación del desarrollo, la inversión pública,

⁴ La serie sobre “credibilidad” recoge las respuestas positivas (SI) de los encuestados, mientras que la calificación de la gestión agrupa las respuestas favorables (Buena y Muy Buena).

la regulación económica y la redistribución de la riqueza social –entre otros elementos– ha permitido a los circuitos de poder guayaquileños posicionar fácilmente su puja política con el Gobierno en los clásicos términos de la *identidad local agraviada* por la burocracia central. Una vez más, la cuestión regional emerge como una de las líneas de conflicto y polarización política. La importante presencia del PSP en la Amazonía puede también contribuir a exacerbar dicha dinámica desde tal región del país.

¿Hacia la tripartición del campo político?

Constatar una cierta volatilidad programática de AP en el curso de la elaboración de las leyes por la Carta Magna, no supone afirmar que el país asista a un proceso de despolarización ideológica en el que la diversidad de valores e ideas políticas hayan dejado de ser objeto de controversias y querrelas públicas. Nada más lejos de aquello. Aunque debilitadas, las fuerzas de la derecha política –con largo eco mediático– mantienen una nítida línea de oposición programática y confrontación política con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Las diferencias entre ambos campos aparecen como irreductibles.

El bando *neo-conservador* insiste, pues, en contestar las bondades del proyecto político de Rafael Correa por la vía, sobre todo, de su rechazo frontal al retorno del Estado como eje coordinador de las relaciones económicas y sociales. Su discurso se ampara fundamentalmente en la enfática defensa de la libertad negativa –la no interferencia del Estado en el mercado y en el ámbito privado de las relaciones sociales–, en su apuesta por la auto-regulación de los sistemas sociales y en demandas de seguridad, más que para los ciudadanos, para las inversiones extranjeras. El rechazo del centralismo, del decisionismo presidencial y de la falta de fiscalización al poder ejecutivo completan esta potente retórica. Desde este bloque también se han escuchado álgidas críticas a las innovaciones participativas que estipula la Constitución –acusada, por ello, de anti-liberal– y al campo de alianzas geo-políticas abiertas a nivel internacional por el gobierno.

El debate en torno al proyecto de ley de comunicación agudizó las tensiones entre la Revolución Ciudadana y, sobre todo, los actores políticos del campo neo-conservador. La tesis fundamental de estos últimos es que dicho proyecto atenta contra la libertad de expresión, que en el ámbito comunicativo “la mejor ley es la que no existe”, y que los medios son –mediante el mercado– capaces de regularse a sí mismos. En el último trimestre del 2009 demandaron, pues, el archivo definitivo del proyecto de ley.

La confrontación permanente entre los grandes medios y el Gobierno, y la escasa tolerancia que Correa ha demostrado hacia aquellos –a quienes observa solo como representantes de los grandes grupos de poder–, ha radicalizado las posturas contrarias a cualquier regulación del campo comunicacional. El Presidente ha insistido a su bloque, en cambio, sobre la necesidad de sostener una ley que pueda reconfigurar la matriz de poder social en el país. Las diferencias dentro de AP volvieron entonces a expresarse: no todos los asambleístas comparten la exasperación presidencial con los medios. Como desde los días de Montecristi, sin embargo, la deliberación interna ha conseguido sostener la unidad de una bancada que parece estar siempre a punto de eclosionar. Así, luego de dos años de existencia –cabe recordar que, contrariamente al MAS boliviano, AP surge como movimiento político solo con la llegada de Correa al poder y como fuerza legislativa con el inicio del proceso constituyente a fines del 2007– el oficialismo apenas si ha tenido deserciones en sus filas⁵. En cualquier caso, en tiempos de la Revolución Ciudadana la “cuestión mediática” se ha colocado, ya sea como tópico de debate o como arena de movilización, en el centro de la dinámica política ecuatoriana.

No parece casual, entonces, que en el contexto de la anodina vida organizativa de viejos y nuevos movimientos y partidos políticos y de la incapacidad de la derecha y de la oposición parlamentaria para delinear un proyecto político creíble, sea un periodista

5 Me refiero a dos asambleístas que, en tiempos de la Constituyente, abandonaron AP por su desacuerdo con los más que tímidos avances en materia de derechos sexuales y reproductivos.

de televisión –Carlos Vera– quien aparezca hoy entre los principales contradictores de Correa. Ha sido él quien ha lanzado la tesis de preparar un referéndum revocatorio del Presidente Correa para agosto del 2010. Aunque una parte de la derecha política ve con escepticismo esta idea (Nebot se ha mostrado distante), se trata de un discurso que –en la línea de la oposición venezolana anterior al golpe de Estado del 2002⁶– plantea una arriesgada estrategia de abierta polarización, confrontación y desconocimiento pleno de la legitimidad (y de la fuerza) del gobierno.

Al mismo tiempo, y en el marco de la baja disponibilidad del Gobierno para entablar procesos de diálogo y negociación incluso con los sectores sociales que le son globalmente afines, se hicieron visibles –a lo largo del segundo semestre del 2009– una serie de dinámicas de protesta provenientes de los sectores sociales más organizados de la sociedad. El punto más alto del conflicto, a lo largo de casi tres años de gobierno de Rafael Correa, llegó entre septiembre y octubre cuando convergieron las movilizaciones indígenas en rechazo a ciertos artículos del proyecto de ley de aguas (y de la misma ley minera), las protestas del gremio docente (profesores de primaria y secundaria) en contra de la evaluación académica de los maestros, y aquella de profesores y estudiantes universitarios en reclamo a ciertos contenidos del proyecto de ley sobre la Educación Superior.

Cada uno de estos sectores mantienen específicas críticas a las diferentes decisiones gubernativas y a los proyectos de ley presentados por AP. Comparten entre sí, sin embargo, un mismo malestar por la falta de espacios de debate e interlocución política con la fuerza gobernante. Si entre 2007 y 2008 muchas de las demandas y de los conflictos sociales fueron procesados por una Asamblea Constituyente con mayor voluntad dialógica, desde que ésta llegara a su fin se ha mermado la capacidad de la esfera parlamentaria para mediar intereses y abrir dinámicas de discusión sobre las líneas del cambio político. El peso del liderazgo presidencial absorbe así toda la conflictividad y reduce el espacio de maniobra de un poder

6 Ver Margarita López Maya, 2002, “El golpe del Estado del 11 de abril y sus causas”, en *Sociedad y Economía*, No. 3, Cali.

Todo indica que se desvanece el ciclo en que la disputa entre el bloque del cambio y el campo neoconservador organizó el conjunto de posiciones que trazaron las fronteras del juego político desde el acceso al poder de la Revolución Ciudadana. El combate a la partidocracia no funciona más como nodo articulador del conjunto de fuerzas y actores que resistieron al neoliberalismo y que hoy tratan de desmontarlo. Ciertas inconsistencias programáticas del Régimen, su unilateralismo político, y el cortoplacismo de múltiples demandas gremiales desmigajan, y confrontan entre sí, al campo progresista.

legislativo que, aletargado y sin brújula estratégica, parece satisfacerse con las maniobras conciliadoras de su autoridad máxima, más dirigidas a flotar en la coyuntura y a satisfacer a una opinión pública sedienta de “imágenes de consenso”, que a generar acuerdos programáticos sustantivos con los actores políticos y las fuerzas sociales progresistas.

El síndrome de *gigantismo* –heredado del inmenso peso de la bancada oficialista en la Constituyente– impediría, entonces, que la Revolución Ciudadana reconozca que no tiene ya una mayoría absoluta y que, al contrario, requiere de una estrategia de negociaciones políticas más pausadas con potenciales aliados e, incluso, con no tan enconados adversarios. Correa continúa procediendo, en un escenario en que su potencia política se ha relativizado, como si solo fuese necesario pactar al interior de su heterogéneo movimiento. Incluso allí, no obstante, las tensiones se han agudizado.

El diálogo político con el movimiento indígena, e incluso con el gremio docente, solo fue posible, sintomáticamente, una vez que el nivel de la confrontación política entre el Gobierno y las organizaciones –sobre todo en la Amazonía– llegara a un nivel tan extremo que hubo de registrarse la muerte de un manifestante. Una vez instaladas las mesas de diálogo, uno de los principales reclamos de la dirigencia indígena al Presidente fue su falta de respeto al Movimiento. En cualquier caso, por primera vez en

tres años de Gobierno, Correa era obligado a torcer su estilo de gestión política –centrado en el marketing de su figura y en sus incendiados discursos– a favor de la puesta en marcha de un real proceso de interlocución y negociación política que, en las semanas siguientes, ha continuado en medio de muchas dificultades⁷.

Los actores sociales movilizados en 2009 tienden a reconocer los avances en la política social, internacional y económica del Gobierno –y se identifican con su discurso centrado en la búsqueda de la igualdad y de la soberanía nacional– y, al contrario de los neo-conservadores, no ven con malos ojos el proceso de retorno del Estado al primer plano de la coordinación social. Se diferencian de la Revolución Ciudadana, en cambio, en lo que respecta a una defensa de la legitimidad de sus particulares intereses e identidades políticas y gremiales –el discurso oficial tiende más bien a sostener un universalismo homogenizante que se conecta con la matriz más jacobina del republicanismo clásico– y, sobre todo, del lugar que aquellas deben tener *dentro* de la estructura estatal. Indígenas, gremios, universitarios, sindicatos públicos, etc., se oponen, en efecto, a una línea de reformas que apuntarían a una aparente des-corporativización de las instituciones públicas.

8 Luego de las recientes elecciones de la Ecuarrunari, y a pesar de las coincidencias entre AP y PK en el tratamiento de la ley de aguas, sectores indígenas han anunciado ya su inconformidad con las formas de conducción del diálogo y amenazan con abandonarlo.

Los sectores con mayor capacidad de movilización social parecen defender, por sobre todo, los espacios de representación conquistados en determinados segmentos de la institucionalidad estatal durante las últimas décadas. Confrontan, así, la centralidad de un igualitarismo que pondría por delante al ciudadano abstracto por sobre el reconocimiento del peso político de los sectores (populares) organizados.

Algunos de estos sectores han generado, también, una retórica ambientalista reacia a sostener un modelo de desarrollo –aún cuando sea post-neoliberal y redistributivo– centrado en formas convencionales de explotación de los recursos naturales. La movilización social anti-minera, fundada en torno a dinámicas comunitarias de base campesina e indígena en específicos territorios (sobre todo en el sur), aparece como una de las expresiones más visibles de la nueva conflictividad socio-política en el país.

Tales planteamientos han abierto un prolífico campo de debate público –inédito en América del Sur– entre diversas tendencias de la izquierda, gubernativa y no, sobre el modelo de desarrollo viable y pertinente para el país en las próximas décadas. El Ecuador post-extractivista está en el horizonte. La discusión se centra en qué tipo de vías se escogen, en el presente, para alcanzar un nuevo eje de acumulación. La ruta minera espanta incluso a altos funcionarios gubernamentales. Correa no parece ver más alternativas inmediatas *a mano*. Nada hace presagiar, por tanto, que en este ámbito puedan morigerarse las tensiones políticas en el corto plazo. Mientras, los neo-conservadores celebran las tensiones en el ‘bando progresista’ y guardan un pesado silencio sobre tan compleja cuestión.

En suma, todo indica que se desvanece el ciclo en que la disputa entre el *bloque del cambio* y el *campo neoconservador* organizó el conjunto de posiciones que trazaron las fronteras del juego político desde el acceso al poder de la Revolución Ciudadana. El combate a la *partidocracia* no funciona más como nodo articulador del conjunto de fuerzas y actores que resistieron al neoliberalismo y que hoy tratan de desmontarlo. Ciertas

inconsistencias programáticas del Régimen, su unilateralismo político, y el cortoplacismo de múltiples demandas gremiales desmigajan, y confrontan entre sí, al campo progresista.

Si la movilización social puede enderezar ciertas decisiones gubernamentales y mostrar incluso la consistencia de opciones políticas alternativas, la molecularidad y la dispersión de sus objetivos no alcanza (hoy) para dotar de sentidos abarcadores a la política del cambio por la que gran parte de la sociedad, reconociendo sus ambivalencias, aún guarda enormes expectativas. Si la centralidad del discurso y de la figura presidencial puede operar como constructora de un horizonte común e interpelar a quienes usualmente la política ha ignorado, la suplantación de la construcción organizativa y la deliberación democrática por el mercadeo del programa de gobierno y la procura de amplias audiencias no basta para generar vínculo político ni espacios reales de participación e interlocución con los actores políticos realmente existentes.

Solo una paciente política de articulación, debate y negociación puede, más que llegar a conciliar posiciones y a unificar bandos, volver arrojar luz sobre los intereses y los valores centrales que comparten entre sí las fuerzas democráticas. Sin dicho reconocimiento, la orientación de los antagonismos políticos continuará extraviándose hacia escenarios en que las líneas de cambio tiendan a bloquearse mutuamente mientras se incuban tendencias a la turbulencia y a la inestabilidad política. *Los adversarios son otros.* 

Todo indica que se desvanece el ciclo en que la disputa entre el bloque del cambio y el campo neoconservador organizó el conjunto de posiciones que trazaron las fronteras del juego político desde el acceso al poder de la Revolución Ciudadana.